

¿Qué pensaría usted de un país en el que fuera ilegal, en la práctica, crear una determinada televisión local, en el que el Gobierno pudiera cerrar una emisora de radio y en el que los periódicos estuvieran obligados a publicar la propaganda electoral que se prohíbe a la televisión privada? Medite usted un instante antes de responder. Porque ese país es éste, España. Estamos acostumbrados a decir que en España disfrutamos de un alto nivel de libertad de expresión y, sin duda, la Constitución nos anima a mantener y defender este juicio. Pero no hemos de quedar prendidos de las palabras. Si miramos un poco más allá, si examinamos minuciosamente la legislación y observamos la actuación de los poderes públicos, matizaremos ese primer dictamen. La actividad informativa está amenazada en España por muchos y serios riesgos, controlada de muy diversos modos.

Este libro expone y analiza las relaciones entre el Poder y los medios de comunicación, difíciles y siempre peligrosas relaciones en las que se enfrentan dos instancias que se controlan. La Prensa —y se utiliza aquí este sustantivo como referencia clásica a todos los medios de comunicación en general— tiene la misión de observar al Poder, de informar sobre quienes lo ejercen, de dar la voz de alarma cuando descubre irregularidades. La Prensa, además de medio de comunicación, es también una instancia de autodefensa de los ciudadanos. El Poder, por el contrario, está obligado a soportar a la Prensa y, aunque le duela, a defenderla y, si llega el caso, a ayudar a su existencia por ser uno de los asientos del plura-

lismo social y político. Pero el día a día es cruel y el Poder acaba ingeniándose para esquivar y silenciar la información. En las sociedades libres, la Prensa tiene, entre otras, misiones de contrapoder, es un vehículo para el control social del Poder, pero es el Poder, el poder político sobre todo, el que ejerce el control con eficacia.

El resultado es unas batallas continuas que, para que las cosas vayan bien, debe perder el Poder, pero que suele perder la Prensa. La victoria final, sin embargo, nunca es del Poder en una democracia, en la que la Prensa cumple una misión insustituible. Lo que caracteriza a la situación española es el desequilibrio de fuerzas. El poder político no sólo dispone de amplias facultades para intervenir en la vida de muchos medios informativos sino que también participa como protagonista en el sector de la comunicación. El poder político, mediante la gestión de diversos medios públicos, es en España un competidor de los medios privados, juez y parte, y eso altera el orden natural de las cosas.

Es cuando menos sorprendente que los gobernantes españoles se quejen con tanta frecuencia de estar rodeados y acosados por los medios de comunicación, porque, frente a los medios críticos, que son minoría, pueden oponer una abundancia de medios estrictamente controlados. La mano del poder político llega muy lejos a través de la información controlada, llega hasta una mayoría de ciudadanos. Si a esta realidad se añaden las numerosas facultades que la ley otorga a la Administración para regular la creación y la actividad de las empresas informativas, la conclusión no puede ser más clara: es muy alto el control político que sufre la información en España.

Este libro describe todas las competencias que el Poder tiene atribuidas para intervenir en la información, más todos los ardides y todas las argucias de que se vale para ejercer como comunicador y hacer frente a los demás medios. Arranca con un capítulo dedicado a exponer las razones por las que los gobernantes luchan contra la Prensa. Continúa con una explicación minuciosa de las medidas legislativas y las estrategias políticas que persiguen el control de la información. Describe luego la actividad del Gobierno como gestor directo de información. Analiza el control político ejercido

sobre las empresas informativas, los mensajes y los periodistas. Y concluye con unas propuestas claras para poner freno al intervencionismo y defender la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos. Un «epílogo para ingenuos» relata un episodio del que fue protagonista y víctima el autor y que explica bien claramente cómo el control de la información puede causar efecto por los canales más inesperados.

Los capítulos que siguen resultarán sorprendentes, acaso escandalosos, para el lector no introducido suficientemente en la realidad política del país. Sorpresa y escándalo serán achacables a las leyes y a la actuación del Gobierno. El autor confiesa que ha hecho el esfuerzo de no exagerar una situación tan peculiar y tan preocupante. En muchos pasajes ha preferido la descripción sobria y ha apoyado siempre sus afirmaciones en textos legales, en testimonios y en análisis rigurosos. Si el cuadro final está tan necesitado de restauración no es por un exceso del autor sino por los múltiples problemas en que se debate la actividad informativa en España. Esa reparación necesaria no es otra cosa que la regeneración que está pidiendo el caso.

El derecho a la información es un patrimonio de todos los ciudadanos y la información es un elemento básico de la sociedad democrática. La teoría liberal ha explicado este valor irreemplazable de la información. Alexis de Tocqueville atribuía a la Prensa una dimensión cardinal cuando la definía como «el instrumento democrático por excelencia de la libertad». Por ello, esa regeneración se presenta ante nosotros como una tarea ineludible. Juzgue el lector, si no, cuando conozca lo que dicen las siguientes páginas.